La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, transpone al ordenamiento jurídico español la conocida como Directiva de “Whistleblowing” y pretende reforzar la cultura de cumplimiento de las entidades públicas y privadas mediante la protección de los denunciantes que informen sobre infracciones conocidas en el contexto laboral o profesional. A tal efecto impone la obligación de crear un sistema interno de información (Buzón de Denuncias)

¿Qué es y para qué sirve el Buzón de Denuncias del Cabildo de Lanzarote?

El sistema interno de información (Buzón de Denuncias) es un canal seguro de participación electrónica que nace de la necesidad de ofrecer, por parte del Cabildo de Lanzarote, un espacio que permita presentar denuncias a través de Internet.

Este buzón incorpora mecanismos que garantizan la confidencialidad de todas las informaciones y ofrece un espacio de comunicación seguro para mantener contacto con el Cabildo de Lanzarote, permitiéndola interacción entre éste y los denunciantes de manera anónima.

Gracias a este canal se posibilita que cualquier persona relacionada con él, con sus empresas públicas, organismos autónomos, entidades empresariales locales, sociedades mercantiles, fundaciones del sector público y consorcios adscritos al Cabildo de Lanzarote o con servidor público, pueda facilitar información sobre casos de fraude o corrupción de los que tenga conocimiento sin sufrir represalias.

Es por lo tanto un medio de lucha contra el fraude que preserva la identidad de la persona que realiza la comunicación, y que, además, incorpora herramientas para garantizar también los derechos de las personas que sean denunciadas.

Conviene señalar que para evitar que se haga un mal uso del buzón, se aplican criterios estrictos para admitir las comunicaciones con la exigencia de responsabilidad civil, penal o administrativa de personas que comuniquen hechos con abuso de derecho o vulnerando el principio de buena fe. Es decir, denuncias falsas.

Objetivos del Buzón

-Facilitar la presentación de denuncias.

-Garantizar la confidencialidad del informante.

-Servir de herramienta para poner en conocimiento de la Corporación su ámbito material de aplicación:

a) Cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea siempre que:

1.º Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno

2.º Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

3.º Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.

b) Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

2. Esta protección no excluirá la aplicación de las normas relativas al proceso penal, incluyendo las diligencias de investigación.

3. La protección prevista en esta ley para las personas trabajadoras que informen sobre infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, se entiende sin perjuicio de la establecida en su normativa específica.

4. La protección prevista en esta ley no será de aplicación a las informaciones que afecten a la información clasificada. Tampoco afectará a las obligaciones que resultan de la protección del secreto profesional de los profesionales de la medicina y de la abogacía, del deber de confidencialidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito de sus actuaciones, así como del secreto de las deliberaciones judiciales.

5. No se aplicarán las previsiones de esta ley a las informaciones relativas a infracciones en la tramitación de procedimientos de contratación que contengan información clasificada o que hayan sido declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado.

6. En el supuesto de información o revelación pública de alguna de las infracciones a las que se refiere la parte II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 23 de octubre de 2019, resultará de aplicación la normativa específica sobre comunicación de infracciones en dichas materias.

Ámbito de actuación:

El ámbito de actuación del Canal de Denuncias es el siguiente:

- La administración del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, su Presidencia y las Consejerías.
- Susector público instrumental: Organismos autónomos, entidades públicas empresariales y otras entidades de derecho público entre las que se encuentran sociedades mercantiles, fundaciones de sector público y consorcios de los que forme parte.
- Las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, los organismos y las entidades públicas.
- Las actividades de personas físicas o jurídicas que sean concesionarias de servicios o receptoras de ayudas o subvenciones públicas, a los efectos de comprobar el destino y el uso de las ayudas o las subvenciones.
- Las actividades de contratistas y subcontratistas que ejecuten obras de las administraciones públicas y de las entidades del sector público instrumental o que tengan atribuida la gestión de servicios públicos con relación a su gestión contable, económica y financiera y con las otras obligaciones que se derivan del contrato o de la ley.
- Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.
- Cualquier entidad, independientemente de la tipología o la forma jurídica, que esté financiada mayoritariamente por las administraciones públicas o esté sujeta al dominio efectivo de éstas.

Funcionamiento

Para que las comunicaciones dirigidas al Buzón de Denuncias puedan ser tenidas en consideración y, en consecuencia, admitidas, han de cumplir los siguientes requisitos:

- Describir de la manera más detallada posible las circunstancias que faciliten la identificación de la actividad fraudulenta.
- Proporcionar toda la documentación disponible acerca de la situación que se comunica, o indicios objetivos para poder obtener pruebas por parte del Responsable del Sistema.
- Tener la certeza razonable de que la información que se traslada tiene una especial trascendencia para lograr la integridad y buen gobierno del sector público, o bien ayuda a evitar el fraude en el empleo de dinero público.
- En cualquier caso no se admitirán comunicaciones basadas en opiniones personales que no vengán acompañadas de la suficiente fundamentación o aquellas otras que sean notoriamente falsas.

Una vez presentada una denuncia por medio del Buzón, los informantes obtienen de la aplicación un acuse de recibo en el que se les confirma que la denuncia ha sido realizada

con éxito. Este acuse de recibo incorpora un código alfanumérico de acceso a un canal de comunicación confidencial.

El código asignado cuando se accede al Buzón es la única forma de acceso y es responsabilidad del denunciante conservarlo. Este canal seguro de comunicación electrónica garantiza la confidencialidad de las comunicaciones y ofrece la posibilidad de preservar el anonimato. Permite además mantener la colaboración en la comprobación de los hechos.

El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación, no podrá ser superior a tres meses a contar desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.

Seguimiento

- El seguimiento y toda la comunicación con el informante asignado a cada caso, se llevará a cabo exclusivamente dentro de la aplicación.
- Una vez presentada la comunicación y admitida a trámite se procederá a analizar la verosimilitud de los hechos en un plazo no superior a tres meses, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.
- La comprobación de los hechos se llevará a cabo realizando tareas de investigación y si procede se formularán recomendaciones de mejora en la gestión pública; se propondrá al órgano competente iniciar expedientes administrativos para restaurar la legalidad alterada y la adopción de medidas disciplinarias o se comunicarán a la Fiscalía aquellas conductas que puedan ser constitutivas de un ilícito penal.
- Durante todo el proceso se adoptarán mecanismos para garantizar, tanto la integridad de las personas que aporten información, como la de aquellas que se vean afectadas por los hechos o situaciones a los que haga referencia la misma.

Comunicaciones anónimas

El Buzón de Denuncias permite el anonimato y garantiza la confidencialidad y seguridad de las comunicaciones.

El Buzón garantiza en todo momento la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del informante. Las personas pueden facilitar sus datos identificativos y de contacto o, si lo prefieren, también pueden hacer la comunicación de manera anónima.